

La consulta plantea la conformidad con la normativa de protección de datos personales de las condiciones generales de contratación de los servicios de prestados por ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L bajo la marca comercial SYMIO.

A tal efecto, dichas condiciones contienen un apartado dedicado a la materia objeto de análisis bajo la denominación 13. PROTECCIÓN DE DATOS que contiene información acerca del tratamiento de datos personales que se derive de la prestación de los distintos servicios prestados a los que da cobertura las citadas condiciones.

I

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en lo sucesivo), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo) conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

El citado RGPD introduce profundas modificaciones en las normas de protección de datos que afectan de forma relevante, entre otras cuestiones, al denominado principio de transparencia y derecho de información de los afectados.

II

Teniendo en cuenta lo anterior, para analizar la conformidad de las cláusulas aportadas a la normativa citada, debe acudirse a los preceptos que nos indicarán, cómo se ha de proporcionar la información (artículos 12 RGPD y 11 LOPDGDD) qué información se ha de proporcionar (artículo 13 y, en su caso, artículo 14 RGPD), y finalmente el contenido de la información que ha de ofrecerse (que de acuerdo con el artículo 6 del RGPD dependerá del tratamiento al que se haga referencia en cada caso).

En cuanto a la primera de las cuestiones, debemos partir de lo dispuesto en el artículo 5.1 del RGPD que otorga la categoría de principio a la transparencia al indicar que:

«1. Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

y en su apartado 2 refuerza su relevancia al formar parte de aquellos principios que al amparo de la responsabilidad proactiva cualquier responsable debe estar en condiciones de acreditar su estricto cumplimiento:

(...)2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).»

Asimismo, el Considerando 39 del RGPD de manifiesto el significado y el efecto del principio de transparencia en el contexto del tratamiento de datos, al indicar que

«Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento [...]».

Por su parte, dispone el artículo 12 RGPD bajo la rúbrica *“Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado”*, en su apartado 1 lo siguiente:

«El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. (...) »

En cuanto a la LOPDGDD, el artículo 11 hace referencia a la *“Transparencia e información al afectado”*, plantea la posibilidad de utilizar un sistema por capas informativas distinguiendo entre una información básica, y una segunda capa con información adicional, al indicar lo siguiente:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concorra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

En la cláusula aportada a la presente consulta, se observa que se proporciona información consistente, en síntesis, en la identificación del responsable del tratamiento, y luego una subdivisión en epígrafes que obedece a la siguiente diferenciación.

El primer apartado 13.1 es dedicado al tratamiento de datos cuando el cliente es una persona física, y que indica literalmente lo siguiente:

Orange/Jazztel informa que los datos personales del Cliente persona física serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Anexo de Privacidad que ha sido puesto a disposición y aceptado por el Cliente.

El segundo apartado 13.2 es dedicado al tratamiento de datos cuando el cliente es una persona jurídica, dónde se informan de varios aspectos como diferentes finalidades con las correspondientes bases jurídicas de legitimación; el plazo de conservación de los datos, las posibles comunicaciones, el ejercicio de los derechos y la posibilidad de interponer reclamación ante la AEPD.

Y en el tercer apartado 13.3 está dedicado al análisis de la figura del consultante como encargada del tratamiento en determinados supuestos y a los compromisos y obligaciones que asume derivados de tal condición.

De acuerdo con la sistemática expuesta no se puede concluir que se esté utilizando un sistema de información por capas o niveles en los términos del artículo 11 LOPDGDD.

En consecuencia, procede el análisis de la adecuación de las cláusulas analizadas a lo dispuesto en los artículos 12 RGPD para verificar cómo ofrece la información y del 13 del RGPD para analizar el contenido de dicha información.

III

Nos indica el artículo 13 RGPD lo siguiente:

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los finés del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*

d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;

e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.

IV

En relación con el primero de los requisitos, **la identidad del responsable del tratamiento** debe señalarse con carácter previo, lo indicado en el Considerando 79 del RGPD que señala que

(...)La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable.(...)

Se recoge así la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos, al objeto de determinar con acierto la atribución de responsabilidades de acuerdo con la citada norma.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la cláusula sometida análisis se indica lo siguiente:

Responsable del Tratamiento: Orange Espagne S.A.U. (en adelante, "Orange"), con NIF XXXXXXXX y Domicilio Social en XXXXXXXXXX

Por lo tanto, se cumple el primer requisito de información previsto en el artículo 13.1 a) del RGPD.

En relación con los datos de contacto del delegado de protección de datos, que requiere el apartado 1. b) del citado artículo 13, se incluye una dirección de

correo electrónico establecida al efecto, por lo tanto, también se cumple este requisito.

V

Ahora bien, antes de continuar analizando los restantes requisitos del artículo 13 RGPD, debe indicarse que la cláusula sometida a informa se subdivide en los tres apartados que se han citado en los apartados anteriores del presente informe y conviene detenerse en el primero número 13.1 de la cláusula dedicado al tratamiento de datos cuando el afectado es persona física, en el que se informa lo siguiente:

Orange/Jazztel informa que los datos personales del Cliente persona física serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Anexo de Privacidad que ha sido puesto a disposición y aceptado por el Cliente.

Obviamente, no se puede considerar que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, ya que la información que consta en el apartado 13.2 de la cláusula esta referida al tratamiento de datos cuando el cliente sea persona jurídica.

El “Anexo de privacidad” al que se hace referencia no ha sido aportado a la consulta planteada, y además al indicarse que “ha sido puesto a disposición y aceptado por el cliente”, se infiere que se ha solicitado el consentimiento del afectado para someterse a las condiciones de dicho anexo.

Pero se desconocen las circunstancias en las que se ha aceptado por el “cliente”.

Pues bien, debe recordarse al consultante que, si la finalidad del tratamiento es posibilitar la prestación del servicio, la base jurídica de legitimación es la prevista en el artículo 6.1 b) del RGPD a cuyo tenor *b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;*

Si el tratamiento obedece a otras finalidades, debe encontrarse la legitimación en otro supuesto del artículo 6.1 del RGPD, y en el caso del consentimiento debe advertirse los requisitos que debe revestir este, como son **la clara acción afirmativa, informada, explícita para cada finalidad, y en lo que aquí interesa resaltar prestado de modo libre, y como nos recuerda el artículo 7 RGPD y los considerados 32 y 43 no podemos entender prestado libremente si la prestación del servicio contratado se supedita precisamente al otorgamiento de dicho consentimiento.**

A lo que hay que añadir que la revocación tampoco debe afectar a la continuidad del servicio contratado, pues precisamente la base jurídica debe ser la prevista en el art. 6.1 b) RGPD.

Y finalmente recalcar que la carga de probar la prestación del consentimiento, con los requisitos indicados, recae en el responsable del tratamiento.

Una cosa es ser informado del tratamiento al que van a ser sometidos los datos personales y otra es la aceptación o aquiescencia de una determinada finalidad en los términos y requisitos que se acaban de indicar. Por mucho que se acepte una determinada política de privacidad, será contrario al RGPD si se incumple este, y en especial los principios que han de informar cualquier tratamiento, y en lo que aquí interesa el principio de transparencia y el de licitud.

En consecuencia, **el contenido de la cláusula 13.1 sometido a informe se estima contrario al artículo 12 y 13 del RGPD y se informa desfavorablemente, pues no consta nada al respecto y se desconoce los términos en los que se ha obtenido el consentimiento y para qué finalidad.**

Se recuerda que el tratamiento de datos sin base jurídica suficiente puede ser constitutivo de una infracción prevista en el artículo 83.5 a) del RGPD.

VI

En relación al deber de informar sobre *los fines del tratamiento y la base jurídica del tratamiento* que consta en el apartado 13.2 de la cláusula referida al tratamiento de los datos personales de los representantes de las personas jurídicas debe indicarse lo siguiente:

Se distinguen tres finalidades y se identifican las correspondientes bases jurídicas o supuestos de legitimación, en concreto, con la finalidad de permitir el mantenimiento, cumplimiento y control de la prestación, se señala como base del tratamiento “el cumplimiento de la relación contractual”.

En segundo término, con la finalidad de el envío por cualquier medio de comunicaciones comerciales personalizadas propias y de terceros, se señala como base legitimadora el interés legítimo.

Pues bien, sobre el tratamiento de datos basado en el **interés legítimo** conviene recordar con carácter previo la doctrina del Tribunal Supremo sobre los requisitos para apreciar esta base jurídica en acciones de mercadotecnia, como es el caso de la cláusula hoy sometida a análisis y cabe citar por todas la Sentencia núm. 1460/2020 de 5 de noviembre:

(...). Es cierto, como expone la recurrente, que conforme al Reglamento de la Unión Europea es posible el tratamiento de datos personales sin contar con el consentimiento expreso y previo del afectado, estableciendo otros supuestos habilitantes para el tratamiento de datos, entre ellos, cuando sea «necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero» (art. 6.1.f)). Y también es cierto que el tratamiento de datos para la mercadotecnia directa tiene la consideración de un interés legítimo, según dispone el considerando 47 in fine y en el artículo 21 dedicado al derecho de oposición al tratamiento por parte del sujeto interesado.

Ahora bien, el uso de los datos personales para cumplir ese fin legítimo exige, según el Reglamento de la Unión, que el interesado haya tenido la oportunidad de oponerse a dicho tratamiento, y que este derecho se le haya comunicado explícitamente, así se dispone en el considerando 70 y en el art. 21 de dicha norma.

Ahora bien, debe indicarse que la cláusula analizada al indicar “por cualquier medio” y comunicaciones comerciales “de terceros”, el criterio mantenido por este Gabinete Jurídico respecto de la aplicación de la base jurídica prevista en el artículo 6.1 f) del RGPD – la concurrencia de un interés legítimo – para acciones de mercadotecnia a través de medios electrónicos, es que cuando se trate de comunicaciones electrónicas, el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico -norma especial cuya aplicación prevalece sobre el Reglamento-, **exige el consentimiento expreso del interesado, salvo que se trate de productos y servicios similares a los ya contratados por el usuario.**

Excluyéndose por tanto el interés legítimo para este tipo de envíos. (en el Informe 195/2017 de este Gabinete jurídico se indicaba que La Ley 34/2002 constituye norma especial en relación con estas actividades, por lo que no podría acudir para resolver la cuestión planteada en este punto a las previsiones del reglamento general de protección de datos, sino que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en esta norma especial cuando las comunicaciones se lleven a cabo a través de medios electrónicos)

Respecto de otros canales de comunicación, esta Agencia ha venido entendiendo que, por analogía, **resulta posible efectuar publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados, pudiendo existir un “interés legítimo” siempre y cuando se haga una interpretación razonable de lo que debe ser un producto o servicio similar al previamente contratado, no extendiéndose a aquéllos respecto de los que no pueda aplicarse una identificación lógica basada en la expectativa razonable del**

cliente (Informe 195/2017), **y no puede considerarse como tal las comunicaciones comerciales de terceros.**

Por lo tanto, las comunicaciones por medios electrónicos propias y también las de terceros, a través de cualquier canal, no pueden ser legitimadas sobre esta base jurídica.

Asimismo, el propio artículo 13.2 b) RGPD, indica que debe informarse de cuál es el interés legítimo que se alega, no bastando una genérica remisión.

En consecuencia, **se informa desfavorablemente la información sobre dicha finalidad sobre la base jurídica del interés legítimo, debiendo procederse a su modificación.**

Y, en tercer lugar, se informa sobre “finalidades adicionales” sin especificar cuáles son y se señala como base del tratamiento el consentimiento.

Pues bien, únicamente debemos hacer la oportuna remisión a lo indicado anteriormente sobre los requisitos que debe revestir el consentimiento resaltando que el consentimiento debe ser una clara acción, positiva, libre e informada, y revocable, no siendo válidas formulas como la inacción o el consentimiento tácito, así como que la finalidad del tratamiento debe ir perfectamente identificada. En este sentido, el Considerando 43 “se presume que el consentimiento no se ha dado libremente cuando no permita autorizar por separado las distintas operaciones de tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en el caso concreto, o cuando el cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, sea dependiente del consentimiento, aun cuando este no sea necesario para dicho cumplimiento”.

En consecuencia, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 7 del RGPD y en los considerandos 42 y siguientes la obtención del consentimiento será conforme a derecho.

Por lo tanto, y en relación con el artículo 13. 1 c) y f) RGPD, debe indicarse que se identifican los fines del tratamiento y la base jurídica que legitima su uso, todo ello sin perjuicio de las modificaciones que como se ha indicado se estiman necesarias para adecuar la cláusula al principio de transparencia, y para la aplicación correcta de las bases jurídicas prevista en el artículo 6.1 a) y f) RGPD, con carácter general, y en especial para acciones de mercadotecnia por medios electrónicos.

VII

En cuanto al deber de informar *sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos objeto de tratamiento*, se observa que informa sobre las posibles cesiones a distintas autoridades públicas.

Por lo tanto, y en relación con el artículo 13. 1 e) del RGPD se observa que en el sistema de información se indican los aspectos requeridos.

VIII

En cuanto a la obligación de informar sobre *el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo*, se informa lo siguiente:

Los datos del cliente serán conservados durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella.

Como puede observarse la cláusula está redactada de forma errónea o incompleta pues no se indica a que se refiere “en que ésta subsista”, por lo que **se informa desfavorablemente la redacción de la cláusula.**

Respecto de la obligación de informar sobre *la existencia de decisiones automatizadas, y en su caso, la elaboración de perfiles*, si bien no se indica expresamente alguna finalidad bajo esta denominación, **se recuerda que si para el envío de comunicaciones comerciales que se prevé, se ha realizado o se pretende realizar un perfilado del afectado de sus preferencias comerciales basado en los datos aportados y generados como consecuencia de la prestación del servicio, se debería informar de la elaboración de perfiles en los términos indicados y ofrecer expresamente el derecho de oposición en los términos de los artículos 21 y 22 del RGPD.**

Por lo tanto, y en relación con el artículo 13. 2 a), y b) del RGPD se observa que en el sistema de información **no se cumplen con las obligaciones derivadas de dicho precepto.**

En cuanto a la obligación de informar sobre *el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, y sobre el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control*, se observa que se informa de este aspecto. (artículo 13.2 c) y e) RGPD)

En cuanto a la información sobre *la procedencia de los datos objeto de tratamiento*, prevista en el apartado 2 letra f) del artículo 13 RGPD **no se observa que se recoja en la cláusula analizada.**

IX

Finalmente, en el apartado 13.3 de la cláusula sometida a informe se aborda la condición que ostenta la consultante con carácter general respecto del tratamiento de datos, autodenominándose como responsable del tratamiento

con carácter general e identificando un supuesto en que podría ser encargada del tratamiento y las obligaciones que asume en este supuesto.

En concreto se indica que:

En caso de que la prestación de los Servicios contratados por parte de un Cliente persona jurídica implique la realización de actuaciones por parte de Orange que conlleven un acceso por parte de esta a datos de los que es responsable el Cliente según la normativa aplicable en materia de protección de datos, Orange realizará dichos tratamientos por cuenta del Cliente como Encargado del Tratamiento

Pues bien, debe recordarse tal como nos indica el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) en su Dictamen 7/2020 “sobre los conceptos de responsable y encargado” que dichas categorías responden a un elemento funcional en relación con las circunstancias propias del tratamiento al que se esté haciendo referencia.

Es decir, la condición que se ostenta respecto de un tratamiento deriva de la posición material que respecto del mismo tenga un determinado actor, y no se es o se deja de ser responsable, encargado o corresponsable, únicamente por una auto atribución o atribución consensuada, sino que la determinación vendrá dada por el análisis de más elementos, como se ha indicado antes las citadas Directrices 7/2020, disponen que (...) Los conceptos de «responsable del tratamiento», «corresponsable del tratamiento» y «encargado del tratamiento» **son conceptos funcionales**, puesto que se utilizan para asignar responsabilidades en virtud de la función que desempeña cada una de las partes, **y autónomos**,(...)

En consecuencia, el consultante respecto del tratamiento de los datos de sus clientes ostentará con carácter general la condición de responsable del tratamiento, pues determina los medios y fines del mismo (artículo 4.7 RGPD), y en otros supuestos como el indicado en la cláusula, ostentará una u otra condición dependiendo del caso concreto, cuestión que no es objeto del presente informe.

Asimismo, en la cláusula se recogen una serie de obligaciones en el supuesto de que la consultante actúe como encargada del tratamiento, respecto de lo que debe recordarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 28.3 del RGPD.

Dicho esto, el objeto del presente informe es el análisis de las cláusulas aportadas al principio de transparencia y demás principios que resulten afectados pues tendrán incidencia directa en los derechos e intereses de los titulares de los datos personales que van a ser objeto de tratamiento al amparo

de las mismas, es decir, la finalidad última de este informe es velar por la adecuada implementación del RGPD en un aspecto tan importante para el afecto como es la información que va a recibir sobre el tratamiento de sus datos.

Por lo tanto, analizar las obligaciones que constan en el apartado 13.3 de las cláusulas, supone en último término la validación del contenido de un contrato de encargado del tratamiento -pues sin tener esa denominación el contenido se pretende asemejar a un contrato de encargado- o dicho de otro modo, validar las obligaciones que el consultante asume cuando ostente dicha condición, no puede ser objeto del presente informe ya que las mismas nacen del propio RGPD y en su caso de la LOPDGDD, correspondiendo en última instancia, al responsable del tratamiento y en su caso, al encargado, al amparo del principio de responsabilidad proactiva velar porque sean correctas.

Por lo que no procede la realización de consideración alguna sobre dicho contenido.

X

En todo caso, estas consideraciones sobre la política de privacidad lo son a los exclusivos efectos del presente informe, cuyo objeto esencial es la valoración de las cláusulas aportadas, de forma que no excluye cualquier actuación posterior que haya de llevar a cabo esta Agencia en relación con la citada política y con los tratamientos llevados a cabo por la consultante dentro de su ámbito.